

Cien años de lucha campesina a ojo de pájaro

Armando Bartra

El proceso de modernización empieza con revoluciones campesinas que fracasan. Culmina, durante el siglo XX, con revoluciones campesinas que triunfan.

Barrington Moore

El camino de México hacia la modernización está empedrado de guerras campesinas. El despliegue progresivo del capitalismo económico y de las relaciones sociales burguesas, a lo largo de los siglos XIX y XX, culminó en el predominio de la industria sobre la agricultura y del mundo urbano sobre el ámbito rural; pero, paradójicamente, los combates que derivaron en la preeminencia de las ciudades se libraron principalmente en el campo.

Derrotados o pírricamente victoriosos, los trabajadores rurales han sido actores destacados de la historia moderna de México. En el intrincado desarrollo de la revolución burguesa han representado sucesivamente el papel de víctima, villano o héroe efímero, pero siempre han sido personajes protagónicos. Y en el curso del drama se han transformado profundamente, pero no han abandonado la escena ni se han reducido a la condición de comparsas.

A lo largo de esta prolongada guerra social, que ha forjado nuevas clases y engendrado contradicciones inéditas, los campesinos han mudado con frecuencia de aliados y han tenido que enfrentar diferentes enemigos. Al calor de los combates también las banderas de los trabajadores rurales se han transformado; pero en un punto los campesinos han sido constantes y hasta intransigentes: su oposición a las modalidades burguesas del "progreso". En su sinuoso proceso de consolidación, el capitalismo mexicano se ha

topado siempre con la resistencia, oposición o franca rebeldía de los trabajadores rurales.

Si en la lucha contra el viejo régimen, "progreso" es patrimonio del proyecto burgués y "modernidad" sinónimo de capitalismo, los campesinos mexicanos han sido sistemáticamente reaccionarios. Pero, salvo para una historiografía unilineal, las cosas no son tan simples. Hoy sabemos que el nacimiento del régimen burgués a través de una revolución popular es excepcional, que las fases democráticas del capitalismo son escasas y que las coyunturas en que la burguesía aparece como liberadora de los oprimidos son contadas y siempre breves. El nuevo orden enseña el cobre desde pequeño y las clases subalternas casi nunca han postergado sus propias demandas para sumarse alborozadas a los planes del capital. En la lucha contra el antiguo régimen las utopías de las incipientes clases trabajadoras urbanas y sobre todo de los campesinos, son contemporáneas del proyecto burgués. Hoy sabemos que junto con el capital nace la lucha anticapitalista, y las clases oprimidas no tienen que hipotecar sus intereses y aplaudir a sus nuevos amos para evitarse el mote de conservadoras y ser admitidas por los historiadores como agentes sociales progresivos.

En las génesis y desarrollo del capitalismo mexicano los campesinos han sido una permanente fuerza de oposición, pero esta continuidad histórica no debe ocultar el cambio y la ruptura. Si

tomamos como punto de referencia el surgimiento, consolidación y crisis del régimen burgués, las luchas de los trabajadores rurales aparecen: como premisa histórica de su nacimiento, como condición permanente de su reproducción y como componente destacado de su cuestionamiento revolucionario. Estos tres momentos del movimiento campesino con frecuencia se traslapan y admiten múltiples combinaciones y diversas rutas, pero su tránsito es insoslayable. Los campesinos mexicanos han recorrido parte de este camino y al reconstruir su historia es útil distinguir las diferentes etapas y analizar la vía por la que se han cubierto.

En los próximos apartados nos ocuparemos únicamente de los movimientos agrarios que se desarrollaron después de la revolución de 1910-1920, pero antes de someterlos a este límite cronológico es necesario referirse, así sea brevemente, a la imbricación histórica de las luchas campesinas más recientes con los combates que las precedieron. Comenzaremos, pues, por caracterizar a grandes rasgos los grandes momentos del movimiento campesino mexicano, ubicando las luchas posrevolucionarias en un contexto temporal más amplio.

Aun admitiendo que toda periodización es más o menos arbitraria y supone algunas licencias históricas, creemos que es posible distinguir dos grandes épocas del movimiento campesino mexicano que se asocian directamente con el nacimiento y consolidación del capitalismo en nuestro país: la primera está constituida por las multitudinarias insurrecciones rurales decimonónicas que preceden al impetuoso despliegue modernizador del porfiriato; la segunda comienza con la crisis inicial del incipiente capitalismo mexicano y, arrancando de la revolución que dio principio en 1910, se prolonga hasta nuestros días.

Todo tiempo pasado fue mejor

El siglo XIX mexicano está marcado por una sucesión de insurrecciones rurales que se desarrollan casi ininterrumpidamente y cubren prácticamente todas las regiones del país.

El panorama es abigarrado y heterogéneo: los agravios generadores del conflicto son múltiples, aunque predominan los reclamos por despojos territoriales y tributos excesivos; los levantamientos mesiánicos, como la "guerra de castas" en Yucatán y la rebelión Chamula en Chiapas, coexisten con movimientos inspirados por un socialismo primitivo como el de la Sierra Gorda; las definiciones anticolonialistas de alzamientos como el de Tantoyuca, con motivo de la intervención norteamericana, no impiden que años después los campesinos insurrectos que siguen a Manuel Lozada el "Tigre de Alica", se afilien al intento imperial europeo y respalden a Maximiliano. Detrás de los movimientos están los liberales, los conservadores, el clero o algunas potencias extranjeras; y las luchas campesinas acarrearán agua al molino del centralismo o del federalismo, de la reforma o la contrarreforma, de la independencia o del imperio.

A primera vista los campesinos son materia dispuesta para todas las causas, se movilizan por conflictos disímboles y persiguen los objetivos más diversos. Pero en el fondo las espectaculares insurrecciones rurales, que mantienen en vilo al país durante todo el siglo XIX, son siempre manifestaciones de la resistencia campesina a la expansión de un capitalismo que impone sus premisas a sangre y fuego. Son síntomas de la oposición rural a un progreso burgués que avanza por una vía socialmente reaccionaria. Son, en fin, estallidos de rebeldía contra una modernización que expropia y no libera, que cancela la ya precaria autonomía de las comunidades sin

ofrecer derechos ciudadanos, que lejos de romper los yugos del antiguo régimen remacha sus grilletes y suma cadenas a las cadenas.

La "inteligencia" y los historiadores, desde fines del siglo XIX, han hecho la apología de los reformistas liberales y su doctrina social, pero en su momento esa facción política y su proyecto fueron muy poco populares y sólo su heroica defensa de la nación frente a los intervencionistas les granjeó una cierta legitimidad de masas. El porfiriato fue la versión pragmática y descarada del proyecto modernizador de los liberales, y es proverbial que tampoco gozó por mucho tiempo de la simpatía popular. De hecho los forjadores del progreso mexicano impusieron su programa modernizador a contrapelo de las mayorías agrarias y frecuentemente a sangre y fuego. En su intento de liberar la tierra y el trabajo, el emergente capitalismo mexicano dirigió sus batallas principalmente contra las comunidades rurales y fue, desde el comienzo, un proyecto antipopular que los campesinos vivieron como otra vuelta de tuerca en el añejo sistema de explotación.

Un ejemplo privilegiado de cómo las nuevas formas de explotación se sumaron a las antiguas, formando una combinación explosiva, es la frecuente coincidencia de la expropiación territorial y los tributos excesivos. La aplicación de las Leyes de Reforma "liberó" a las comunidades de gran parte de sus tierras, pero no se exoneró proporcionalmente a los campesinos de las cargas impositivas. Con la desamortización de los bienes comunales se pretendió desvincular a la mano de obra rural para facilitar su explotación asalariada, pero no se renunció a las formas tributarias de explotación y, además, el empleo rural resultó azaroso y mal pagado. Sometidas a un doble saqueo y expropiadas de la base material de sus ingresos, las comunidades estallaron. El disparador

no fueron los viejos agravios, ni tampoco los nuevos por sí mismos, sino precisamente su explosiva combinación.

Enfrentadas a las oleadas expropiadoras de la reforma liberal y del porfiriato e inmersas en un mundo rural que se deterioraba aceleradamente, las comunidades reaccionaron contra el "progreso" y la "modernidad". Ante un oscuro presente y un ominoso futuro, nada más justificado que la añoranza milenarista; de modo que, conforme avanzaba el siglo XIX, los campesinos fueron llegando a la conclusión de que todo tiempo pasado debía haber sido mejor y, presas de una súbita nostalgia conservadora, se rebelaron contra los avances del mal para restaurar tiempos pretéritos que se les antojaban felices.

Pese a que los Yaquis 'brancos' seguían resistiendo en la sierra de Bacatete y la rebeldía maya se mantenía viva en las zonas de refugio de Quintana Roo, las insurrecciones indígenas, para fines del siglo XIX, habían sido en lo fundamental derrotadas. El progreso económico, que no discriminaba a ningún bando, y un estado porfirista que gobernaba para todos los poseedores, hicieron el milagro de reconciliar a la clase dominante. Las rebeliones campesinas perdieron a sus aliados coyunturales y en vez de encontrar fisuras en el bloque en el poder se toparon con una represión unánime y sangrienta. Los años de estabilidad entre dos siglos fueron posibles por la derrota de las insurrecciones indígenas, y la "paz" porfiriana se fincó sobre los sepulcros de innumerables campesinos caídos en combate o simplemente asesinados.

Pero tras el fragor de las batallas se había ido imponiendo silenciosamente un nuevo orden rural. La utopía "farmer" de los reformadores liberales no se cumplió: los pequeños agricultores independientes de carácter ranchero y los jornaleros auténticamente libres resultaron la excepción,

y el latifundio y las labores forzadas siguieron dominando el panorama rural. Sin embargo, el trabajo agrícola se fue unciendo paulatinamente a las necesidades de la acumulación del capital a través de mecanismos menos idealizados pero efectivos: el peonaje "acasillado" y el "enganche" estacional de jornaleros endeudados fueron formas vicarias del trabajo asalariado; los aparceros, arrendadores precarios y "habilitados" constituyeron un ilusorio campesinado independiente, y las propias comunidades, que en muchos casos subsistieron, quedaron subordinadas a los requerimientos laborales de la hacienda, la plantación o la montería. Ni siquiera los trabajadores "libres" del norte eran un auténtico proletariado agrícola, pues la inestabilidad del trabajo los transformaba en una masa itinerante que combinaba las labores agrícolas asalariadas con el empleo en la construcción de obras hidráulicas, la minería, el tendido de vías férreas y la emigración a los EEUU.

Los campesinos que se someten al nuevo orden son los sobrevivientes de las grandes insurrecciones de vocación restauradora, pero su condición de derrotados no los hace sumisos. La abierta rebeldía del pasado es sustituida por el sordo regateo dentro del orden presente, mas no se cancela. En algunos casos la injusticia cotidiana incubaba rebeldías personales: Doroteo Arango y Santana Rodríguez fueron bandidos antes de transformarse en los revolucionarios Pancho Villa y "Santanón", y también un tal Zapata Salazar fue en su momento perseguido por delitos del orden común. Pero los verdaderos héroes de las soterradas luchas campesinas de los años "pacíficos" del porfiriato, no son los bandidos sociales, sino los cientos de anónimos representantes que encabezan a sus comunidades en interminables reclamaciones legales. Zapata y otros caudillos político-militares como él brillaron en More-

los durante la segunda década del siglo, pero antes de la revolución los líderes campesinos del estado eran hombres oscuros y pacientes; representantes comunales como Jovito Serrano, que defendió tesoneramente al pueblo de Yau-tepec contra la hacienda de Atlíhuayán, propiedad de la poderosa familia Escandón, y pagó su atrevimiento con el secuestro político y el trabajo forzado en las inhóspitas monterías de Quintana Roo.

Con el porfiriato se extiende y consolida un nuevo tipo de relaciones agrarias. No se trata de las relaciones sociales que se suponen típicas del régimen burgués, pero sin duda responden a la lógica del capital. Y, de grado o por fuerza, los campesinos aprenden a coexistir con ellas y negociar su reproducción en este nuevo contexto. Las utopías conservadoras, como inspiradoras de la lucha, van siendo desplazadas por el forcejeo más o menos pacífico, y es sintomático, aunque no generalizado, que a principio del siglo XX algunos movimientos campesinos radicalizados comienzan a aceptar la dirección anarco-comunista del Partido Liberal Mexicano que, sin duda, no mira hacia el pasado sino hacia el porvenir. Tal es el caso de los indígenas populucas de la sierra de Soteapan en Veracruz que, dirigidos por los magonistas, se levantan en armas en 1906. El mismo significado tiene la vinculación al magonismo de la guerrilla tabasqueña de los hermanos Gutiérrez Gómez, el reclutamiento del 'bandido' Santanón por el PLM y la presencia política de los magonistas entre el pueblo Yaqui. Más sintomática aún es la incorporación al magonismo de algunos sobrevivientes de la rebelión tomochiteca que sustituyen la inspiración mesiánica de la "niña de Cáborá", por la dirección política de la Junta Organizadora del Partido Liberal.

Pero estos fenómenos, que ya anuncian una lucha agraria inédita, son golondrinas que no ha-

cen verano. La emergencia de un movimiento rural de nuevo tipo tendrá que esperar a la segunda década del siglo, cuando el resquebrajamiento económico del "milagro porfirista" y la reaparición de fisuras en la clase dominante, propiciará de nueva cuenta la insurrección campesina.

Los combates por el futuro

Las vagas promesas del Plan de San Luis generan expectativas, y la rebelión maderista goza sin duda de simpatías entre los trabajadores rurales, pero en un primer momento las ambiciones campesinas son bastante limitadas; no se espera de Madero ningún cambio drástico en el orden existente, a lo más la reparación de algunas injusticias menores y el mejoramiento de las condiciones de regateo con la clase dominante.

Canceladas las grandes utopías restauradoras del siglo XIX el campesinado mexicano hace su reaparición en el escenario político con expectativas muy modestas. Pero unos cuantos meses de revolución hacen más por la conciencia campesina que los treinta años pacíficos del porfiriato. En el curso de los combates los insurrectos miden sus fuerzas, descubren las debilidades de sus aliados coyunturales y radicalizan su proyecto político: no basta con atenuar algunos excesos, es necesario arrancar la injusticia de raíz. Y si las utopías conservadoras ya no son lo suficientemente convincentes hay que inventar una utopía revolucionaria.

El proyecto zapatista plasmado en el Plan de Ayala, como también la "Ley Ejecutiva para la Repartición de la Tierra", promulgada en 1913 por Carrera Torres en San Luis Potosí, y otros programas campesinos semejantes, son la expresión más clara de que el movimiento agrario mexicano ha entrado en una nueva etapa.

Los campesinos, que a lo largo del siglo XIX resistieron infructuosamente la instauración del orden burgués y durante el interludio porfirista asumieron su derrota, emprenden, en la segunda década del siglo XX, la crítica práctica de este nuevo orden. Y esta crítica ya no es restauradora sino revolucionaria.

La maduración del movimiento campesino está lejos de ser homogénea. El proceso revolucionario es marcadamente desigual y si en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y otras regiones del centro, el zapatismo difunde un proyecto político claro, en otros lugares el conflicto es nebuloso y con frecuencia los campesinos combaten en trincheras ajenas y con banderas prestadas. Pero si la utopía revolucionaria no se transforma de un día para otro en patrimonio común, no cabe duda de que para 1920, tras casi diez años de violentos combates y enconadas confrontaciones políticas, la alternativa radical, forjada en Morelos y aclimatada en muchas otras regiones, se ha transformado en una realidad política nacional.

Pese a su carácter abigarrado y dispar, es evidente que la revolución de 1910 no es otro movimiento agrario de corte decimonónico. Ya no se trata de una rebelión conservadora sino de la primera batalla de la guerra campesina revolucionaria. Durante el porfiriato los trabajadores rurales habían saboreado las amargas mieles del capitalismo económico; después, al calor de la lucha revolucionaria, le toman la medida al reformismo burgués y sus adalides. Estas dos experiencias los llevan a forjar su propia opción revolucionaria; y con la emergencia de este proyecto se cierra el ciclo insurreccional del siglo XIX y se inaugura el combate rural del siglo XX.

Pero aunque la abrumadora mayoría de los combatientes sean campesinos, las batallas de la segunda década del siglo son también una oleada



de la revolución burguesa. Los intentos restauradores de la derecha neoporfirista y la intransigencia de la izquierda campesina, colocan a los reformistas burgueses entre la espada y la pared, y en cada nueva fase de la lucha tienen que radicalizar su proyecto si no quieren verse rebasados. Con todo, las facciones más visionarias de la pequeña burguesía logran, a fin de cuentas, imponerse. Tras diez años de acérrimos combates, el porfirismo y los grupos más conservadores han sido definitivamente derrotados; pero también los campesinos radicalizados, el ala izquierda de la revolución, han perdido la batalla.

La lucha del campesinado mexicano en el siglo XX se inicia con una derrota, pero se trata de una derrota gloriosa y extremadamente fructífera. Gracias a su intransigencia en los años violentos de la revolución, los campesinos se abrieron un espacio económico en el desarrollo capitalista posterior y, sobre todo, conquistaron un excepcional espacio jurídico y político dentro del régimen burgués mexicano.

El agrarismo institucional es resultado de la correlación de fuerzas desarrolladas durante la revolución, pero la consagración constitucional de la Reforma Agraria no es suficiente, y su destino en las décadas posteriores dependerá de una permanente negociación entre los campesinos y el nuevo estado. De esta manera el agrarismo mexicano se constituye en terreno de perpetuos y enconados conflictos. Las fluctuaciones de la política agraria durante los años posrevolucionarios son expresión de la cambiante correlación de fuerzas que se establece entre un estado obsesionado por la idea de clausurar la Reforma Agraria y un movimiento campesino empeñado en llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Tal es el contexto y la carga histórica del movimiento campesino posrevolucionario: los trabajadores rurales de nuestro país, que a lo largo del

siglo XIX vieron frustrados sus intentos restauradores y en el porfiriato entraron en la horma del capitalismo económico, desarrollaron, en la segunda década del siglo, una utopía revolucionaria. Este proyecto liberador fue provisionalmente derrotado pero no cancelado, y los avatares del agrarismo hecho gobierno son la expresión de un conflicto permanente y una correlación de fuerzas siempre inestables. Entre el sometimiento y la rebeldía, el movimiento de los trabajadores rurales se va distanciando de un régimen burgués cada vez menos adornado de afeites populistas, y el campesinado, que se descubre irreconciliable también con las nuevas formas del capitalismo agrario, se va constituyendo en una clase revolucionaria contemporánea. En este proceso el pasado no es un lastre; mientras que para el estado mexicano el agrarismo de sus años mozos y reformistas se va transformando en un compromiso incómodo, los campesinos rescatan su herencia histórica y las viejas banderas reaparecen, actualizadas, en las nuevas batallas.

Movimientos de base campesina en la coyuntura de 1920. El "18 Brumario" de Alvaro Obregón

El Congreso Constituyente de 1916-17 sintetiza jurídicamente los saldos de la lucha armada, pero el año de 1920 señala el verdadero término de la revolución mexicana. Con el ascenso al poder del grupo obregonista, aglutinado en torno al Plan de Agua Prieta, se cierra definitivamente un periodo de lucha de clases particularmente aguda, iniciado diez años antes. Ciertamente el fin de la fase revolucionaria en sentido estricto no cancela la lucha de clases y los combates no terminan con la década, pero los movimientos rurales que se desarrollan después de 1920 son de nuevo tipo;

se trata, en rigor, de movimientos campesinos posrevolucionarios.

El régimen obregonista es el primer gobierno posrevolucionario y el forjador de un nuevo estado, no porque suprima los conflictos, sino porque es capaz de encauzar la lucha de clases manteniéndola dentro de límites controlables y evitando que su encono ponga en crisis la reproducción del sistema. Y los movimientos campesinos que se desarrollan después de 1920 son posrevolucionarios, no por una arbitraria convención cronológica, o porque sean menos multitudinarios o radicales que los anteriores, sino precisamente porque, pese a su amplitud y eventual radicalidad, se despliegan en base a las reglas de juego impuestas por el nuevo régimen.

En la medida en que la revolución mexicana es, ante todo, una guerra campesina, la viabilidad del proyecto obregonista depende de su capacidad para encuadrar las reivindicaciones de los trabajadores del campo dentro del nuevo estado. La recuperación de las masas rurales no puede soslayar las demandas campesinas de la década anterior y tiene que ser, por tanto, una modalidad de "agrarismo"; pero se trata, también, de encauzar estas reivindicaciones por canales compatibles con el nuevo orden. Surge entonces la institucionalización del agrarismo, el "agrarismo hecho gobierno".

El estado como ejecutor de la Reforma Agraria será el punto de referencia y definición de los movimientos campesinos posrevolucionarios. Sin embargo en 1920 las modalidades rurales del nuevo gobierno están apenas definiéndose. La caída de Carranza, el interinato de De la Huerta y el ascenso de Obregón, constituyen un periodo de transición entre dos fases históricas que se define por una compleja correlación de fuerzas sustentada en un intrincado sistema de alianzas. Se impone, pues, una somera revisión del estado de las

luchas rurales en 1919-20 pues esa coyuntura es el origen y punto de partida de todos los procesos ulteriores.

La emergencia y consolidación en el poder del grupo de Sonora es posible por la previa confrontación y desgaste de dos fuerzas políticas fundamentales: el carrancismo y el campesinado revolucionario. En esta confrontación las masas campesinas han sido derrotadas, pero su prolongada resistencia ha asestado golpes definitivos al carrancismo frustrando su proclividad restauradora.

Para 1919 el zapatismo y el villismo están en el punto más bajo de un reflujo iniciado cuatro años antes, pero el régimen carrancista tampoco puede consolidarse. En este contexto los caudillos sonorenses aparecen como la única fuerza política capaz de restablecer la unidad nacional y ofrecer una opción gubernamental viable. Traducido a término de clase, podría decirse que la larga y violenta confrontación entre la burguesía terrateniente y el campesinado revolucionario ha erosionado a tal extremo las fuerzas de las clases contendientes, que un sector estructuralmente secundario como la pequeña burguesía está en condiciones de imponer su alternativa a través de un gobierno de corte bonapartista. Y esta pequeña burguesía rural, encarnada en el obregonismo, es capaz de representar a la burguesía en su conjunto, asumiendo la conducción de su estado, en la medida en que es capaz de representar también los intereses del campesinado, pero constriñéndolos dentro de los límites de la legalidad burguesa.

En términos generales ésta es la esencia de la coyuntura de 1920, sin embargo describir de esta manera el dispositivo de clases que le permite al obregonismo restaurar la paz social, puede conducir a una peligrosa simplificación. Ciertamente las que están en pugna son clases y lo que se juega en el combate es el predominio de sus intere-

ses, pero estos intereses de clase se expresan en las prácticas de los más diversos grupos políticos y la fuerza social de las clases en juego encarna en infinidad de movimientos dispersos. Diez años de confrontación revolucionaria han deteriorado a tal extremo la precaria unidad de la sociedad mexicana que, para 1920, los intereses y las fuerzas de clase revisten, casi unánimemente, la forma de intereses y fuerzas regionales representadas por la más variada gama de caudillos.

Por su origen el propio obregonismo es una fuerza regional cuyo núcleo está constituido por un puñado de líderes norteños, principalmente sonorenses; pero su posibilidad de acceder al poder y afianzarse en él radica precisamente en su capacidad de superar este regionalismo en nombre de un proyecto nacional. En contraste, las demás fuerzas sociales en pugna no sólo siguen siendo regionales sino que, en muchos casos, su desgaste se traduce en un localismo cada vez más acendrado.

Para 1919 la única opción global es la que impulsa el grupo norteño de origen ranchero encabezado por Obregón. A estas alturas Carranza ya no representa a nadie, y el campesinado revolucionario, que en 1914 casi esbozó un proyecto nacional, está completamente desarticulado y su núcleo más representativo, el zapatismo refugiado en las montañas de Morelos, se reafirma en su vocación regionalista. Ni siquiera la reacción terrateniente, que quisiera restaurar el porfiriato, dispone de un centro político, Félix Díaz no es más que un aventurero errante que intenta, sin éxito, aglutinar en torno a su apellido y vagas promesas de apoyo externo, a una serie de caudillos regionales que, en el mejor de los casos, lo acogen con condescendencia. La huasteca veracruzana se ha transformado en un dominio de las transnacionales petroleras administrado por Pe-láez, y en Oaxaca, el istmo de Tehuantepec,

Chiapas y Yucatán, el regionalismo extremo cobra la forma de movimientos soberanistas y autonomistas. El país es un mosaico de fuerzas dispersas y enfrentadas que sólo coinciden en su generalizada oposición a Carranza.

En estas condiciones la tarea de consolidar un estado capaz de mantener la hegemonía burguesa sin que los conflictos lleguen a extremos catastróficos supone un pacto de clases. Pero los grandes sectores socioeconómicos carecen de representación nacional coherente, las clases no se expresan en partidos políticos que fueran potenciales interlocutores y su lugar lo ocupan los caudillos regionales. Es pues con ellos con quienes hay que negociar.

Apoyándose en el hecho de que para 1919 estas fuerzas locales se han definido casi unánimemente como anticarrancistas, Obregón logra conciliarlas y concertar un acuerdo entre caudillos que, de algún modo, es también pacto de clases. En torno al Plan de Agua Prieta se aglutinan las fuerzas más disímbolas y antagónicas: desde los irreductibles ejércitos zapatistas de Genovevo de la O, hasta los finqueros "mapaches" y "pinedistas" de Chiapas; pasando por los caciques oaxaqueños de la sierra, la Mixteca y los valles, que habían proclamado la soberanía del estado, y sin olvidar a los cacicazgos emergentes encabezados por caudillos de nuevo cuño como el de Peláez, señor de las Huastecas y el de los hermanos Cedillo, patriarcas de San Luis Potosí. Y por si esto fuera poco De la Huerta, en su entrada triunfal a la ciudad de México, se hace acompañar por una guardia de yaquis "brancos" que pocos días antes mantenían en la sierra de Bacatete una guerra india cuatro veces centenaria.

Sólo su naturaleza regionalista explica qué intereses de clase tan radicalmente antagónicos pudieran coincidir en un común obregonismo. Y la clave de este milagro bonapartista estuvo precisa-

mente en la habilidad de Obregón para negociar en cada región con la fuerza hegemónica, cualquiera que fuese su carácter de clase. Todo consistió en ofrecerles a los cacicazgos regionales que se les respetarían sus áreas de influencia por lo menos mientras el gobierno federal no contara con fuerzas suficientes para desplazarlos.

Pero si estas fuerzas regionales representaban los intereses de clase más antagónicos, tenían algo en común: todas ellas se apoyaban en movimientos de base rural, todas encarnaban en ejércitos campesinos. Para Obregón pactar con los caudillos regionales era también la forma de contener y eventualmente desmovilizar a las masas rurales armadas, cuya agitación se había sostenido por casi diez años.

Una vez derrotado y desmantelado el ejército profesional del porfiriato, tanto las fuerzas revolucionarias como las conservadoras se apoyan en el campesinado en armas. La participación campesina bajo toda clase de banderas, inclusive las de los finqueros más retardatarios, no se explica únicamente por el reclutamiento forzoso y la manipulación política; si muchos trabajadores rurales se incorporan a fuerzas contrarrevolucionarias es porque, de una u otra forma, reconocen en ellas algunos de sus propios intereses. El somero análisis de los movimientos de base campesina que Obregón logra concertar en 1919-20 deberá explicar, no tanto las obvias motivaciones de los campesinos revolucionarios, como las razones por las que otros trabajadores rurales estuvieron dispuestos a respaldar causas, al parecer ajenas.

Para 1919 las masas campesinas se encuentran enroladas en tres tipos de fuerzas:

Un contingente minoritario, representado por los restos del zapatismo y en menor medida por la guerrilla villista de Chihuahua, constituye la

herencia desarticulada y dispersa del campesinado radical. Acosado y reducido de nueva cuenta en el ámbito de sus regiones de origen, este sector representa, sin embargo, la última resistencia de una opción campesina revolucionaria e independiente.

Un segundo sector está enrolado en el Ejército Liberal Constitucionalista que, a partir del Plan de Agua Prieta encabeza De la Huerta. Estos soldados campesinos son los que más asemejan un ejército regular, constituido por tropas forzadas o mercenarias y desarraigadas de sus regiones de origen. Los soldados constitucionalistas son peones de un proyecto global que, como tal, les interesa poco; sin embargo no hay que despreciar ciertos elementos de consenso político pues, a partir de 1915 el constitucionalismo empieza a utilizar el trámite de las demandas agrarias como factor de legitimidad.

El resto es una enorme fuerza campesina dispersa que milita en toda clase de núcleos locales y regionales. Habitualmente se trata de pequeños grupos armados dedicados al bandidaje o la auto-defensa, pero en ocasiones llega a constituir grandes ejércitos encabezados por caudillos regionales. Exceptuando a las gavillas que pescan en río revuelto, todas las demás son fuerzas conservadoras, y, si la revolución es el carrancismo, contrarrevolucionarias. Pero, a diferencia de las tropas constitucionalistas, estos núcleos como los del campesinado radical, se mantienen vinculados a sus regiones y sus mandos, aun los más reaccionarios, están revestidos por la autoridad del cacicazgo local.

El intento por documentar los múltiples movimientos de base campesina operantes en 1920 tendrá que ser somero. Por ello nos ocuparemos únicamente de las dos vertientes más significativas y con mayor componente de espontaneidad:

los restos de las fuerzas campesinas revolucionarias representadas por los rescoldos zapatistas y villistas y los sectores rurales más o menos conservadores enmarcados en movimientos caudillistas regionales.

Rescaldos de la revolución campesina o movimiento sin líder y un líder sin movimiento

Para 1919 el asesinato de Zapata y la cuarta campaña de "cerco y aniquilamiento" implementada por Pablo González desmantelan la última resistencia del campesinado morelense; las tropas constitucionalistas no sólo dominan las poblaciones sino que también han intervenido las haciendas y los ingenios, de modo que en diciembre de 1919 y enero de 1920 los antiguos terratenientes comienzan a recuperar sus propiedades. El 28 de noviembre Gildardo Magaña se entrevista con Carranza en la ciudad de México y a título personal ofrece la rendición a cambio de "garantías" para él y sus hombres. En las siguientes semanas numerosos jefes zapatistas de Morelos y Puebla se rinden en una desbandada general.

Pero si la comuna zapatista ha sido desmantelada, al revertirse las transformaciones agrarias y municipales que le habían dado al campesinado "tierra y libertad", y si el mando político del zapatismo ha sido quebrado con el asesinato del líder y la desmoralización y dispersión de los principales jefes, esto no significa que también la resistencia campesina ha sido aniquilada; muchos guerrilleros se "reconcentran" y recuperan la condición de "pacíficos" sin entregar las armas y algunos núcleos, como los de Genovevo de la O y Francisco Mendoza, se mantienen remontados aunque sin desarrollar acciones militares. En una coyuntura favorable el rescoldo del zapatismo

puede incendiar nuevamente los campos del sur intentando recuperar algo de lo perdido.

Obregón lo sabe y apoyándose en su común anticarrancismo, busca la alianza con el zapatismo disperso. Para febrero de 1920, apenas a dos meses de la rendición, Magaña y Soto y Gama comienzan a reorganizar las fuerzas del Ejército Liberador del Sur y para marzo Genovevo de la O incursiona en el Distrito Federal. A fines de abril la sublevación se extiende por todo Morelos y una vez más los hacendados abandonan la región.

El 9 de mayo, cuando Genovevo de la O acompaña a Obregón en su entrada triunfal a la ciudad de México, el zapatismo entra en una nueva fase; ciertamente ya no es una fuerza independiente y ha renunciado a defender una alternativa propia, pero se incorpora a las reglas del juego posrevolucionarias, conservando, en el nivel regional, una cierta capacidad de negociación. A diferencia de lo que sucede en otros estados, los campesinos de Morelos han conquistado la tierra en el curso de la revolución y la oligarquía local ya no se recuperará del golpe, pero han tenido que renunciar a la libertad, a la instauración de un estado alternativo que no supieron construir nacionalmente y no pudieron tampoco sostener, como "zona liberada", en su comuna morelense.

En el mismo periodo, la otra gran fuerza campesina, la poderosa División del Norte, se ha transformado en una pequeña guerrilla irreductible pero políticamente impotente que actúa en Chihuahua.

El poderío del villismo en sus mejores momentos sólo se explica por un fuerte respaldo popular que le permite al líder poner en pie grandes ejércitos en pocas semanas de reclutamiento político, y si las masas apoyaron al villismo es porque éste, de algún modo, representaba una alter-

nativa liberadora. Pero, a diferencia del zapatismo, el villismo no consolida sus raíces sociales; su escasa vinculación con las comunidades, producto de su origen norteño, le da una mayor movilidad geográfica y le permite constituir un ejército que actuará nacionalmente, pero en el ori-



gen de esta ventaja militar está también la fuente de su debilidad política.

Ni siquiera en Chihuahua el villismo desarrolló algo semejante a la comuna zapatista; en 1913 Francisco Villa fue un gobernador popular y preocupado por las necesidades de las masas, a fines de 1914, después del rompimiento con Carranza, empezaron a darse pasos hacia una reforma agraria, pero el movimiento no logró mantenerse lo suficiente como para liquidar la gran propiedad, Chihuahua nunca es una "zona liberada" ni surge ahí el germen de un nuevo estado. Así, cuando el villismo es derrotado militarmente su desplome es mucho más rápido que el zapatista.

Con todo, para 1919 Villa todavía es capaz de realizar acciones espectaculares; nuevamente en mancuerna con Felipe Angeles ocupa Parral el 18 de abril y a fines de mes avanza sobre Ciudad Juárez y prácticamente tiene tomada la plaza cuando intervienen tropas norteamericanas. Pero la ofensiva dura poco; Angeles comienza a actuar por su cuenta, es aprehendido y muere fusilado el 26 de noviembre de 1919. Por su parte Villa se inmoviliza.

Aun sin su líder, el zapatismo de 1919 es capaz de ofrecer una sorda resistencia social y en Morelos sigue latente la amenaza de una nueva insurrección general; el villismo no tiene este potencial revolucionario, pero en cambio su líder está vivo. Quizá socialmente el villismo no tiene futuro, pero el nombre de Villa aún trae desagradables recuerdos a los constitucionalistas, y su pacificación o liquidación es política y hasta simbólicamente importante.

El propio Villa es consciente de lo que representa: "Creo que los obregonistas rompieron definitivamente con Carranza —dice en mayo de 1920— pero no estoy igualmente seguro de que se encuentran a favor de los verdaderos intereses

de pueblo. . . no veo claro para resolverme a desbandar a mis hombres. . . tengo que ser prudente ya que soy la última esperanza de pueblo mexicano para mejorar su suerte. . ." Y su conflictiva rendición se transforma en un último acto espectacular a la altura del mito.

Entre las promesas de De la Huerta que quisiera pacificarlo y el acoso de Calles que busca su aniquilación, Villa organiza una postrera hazaña militar: en una imposible marcha de 5 días cruza el desierto de Mapimí para caer sobre Sabinas, Coahuila, el 26 de julio de 1920. Sólo entonces, en base a una ofensiva táctica que le ha permitido mejorar la correlación de fuerzas, Villa se decide a negociar. El 28 de julio se firma un convenio en el que se estipula, entre otras cosas, que sus hombres recibirán "tierras en propiedad en el lugar que indiquen los interesados". Días después Villa se presenta en Tlahualilo, punto fijado para deponer las armas, con mil hombres montados y armados.

En rigor, la guerrilla villista de Chihuahua y el zapatismo sólidamente arraigado pero disperso, de Morelos, es todo lo que resta, en 1919, de lo que otrora fue un movimiento campesino revolucionario. En muchos otros lugares diversas manifestaciones de guerra campesina mantienen en vilo al viejo orden, pero esta situación de crisis no ha avanzado en el sentido de una transformación radical de las relaciones sociales. En última instancia sólo el zapatismo combate en Carranza al *restaurador*, porque sólo el zapatismo, y en mucho menor medida el villismo, han emprendido un proyecto de transformación de las relaciones sociales. En Morelos, Carranza es el enemigo, no porque se desdiga de sus promesas de reparto agrario sino porque está reintegrando a sus antiguos dueños tierras e ingenios ya expropiados, porque está restaurando el viejo orden social ya desmantelado.

El campesinado conservador. Caudillos tradicionales y caciques emergentes

Si el regionalismo zapatista es revolucionario porque defiende las transformaciones sociales instauradas en Morelos frente a un proyecto global carrancista que ahí resulta restaurador, en buena parte del país se han consolidado caudillismos regionales conservadores que luchan por preservar el orden establecido frente a la irrupción de fuerzas externas que amenazan la estabilidad. Ante estos regionalismos el carrancismo aparece, no como revolucionario, pues no logra subvertir el orden social apoyándose en sus fuerzas internas, sino simple y llanamente como invasor.

Obregón aglutina todos los anticarrancismos: pacta con el campesino revolucionario ofreciendo respetar las transformaciones sociales ya implantadas, pero para pacificar al país e iniciar la desmovilización del campesinado en armas tiene que pactar también con los cacicazgos conservadores, garantizándoles la conservación del viejo orden al que representan.

Las bases rurales de estos cacicazgos son la otra cara del movimiento campesino, y a principios de los años veinte son sin duda, más numerosas y peligrosas que las desgastadas fuerzas del campesinado revolucionario. Algunos de los caudillos regionales que pactan con Obregón son viejos miembros de las oligarquías locales como Meixueiro en Oaxaca, Fernández y Pineda en Chiapas, etc., y los ejércitos campesinos a los que lideran, no son más que la prolongación en tiempos de guerra de los ejércitos de trabajadores, a los que explotan, en tiempos de paz; pero otros caudillos locales son representantes de cacicazgos formados al calor de la revolución, como el de Cedillo en San Luis Potosí y de Peláez en la huasteca veracruzana; a diferencia del zapatismo

su poder no está basado en una transformación radical del orden de cosas local, sin embargo, a diferencia de los caciques de viejo cuño, estos advenedizos tienen que crearse una base social y sus movimientos esgrimen, en mayor o menor medida, reivindicaciones populares.

Veamos primero dos movimientos encabezados por líderes tradicionales incuestionablemente conservadores para ocuparnos después de los caudillos emergentes con algunas veleidades reformistas.

El control directo que ejercieron las oligarquías locales sobre los estados de Oaxaca y Chiapas durante el carrancismo, es una clara muestra de cómo los movimientos regionales encabezados por caudillos conservadores pudieron gozar de un considerable y paradójico respaldo popular.

En Oaxaca la revolución propicia la alianza de tres caciques regionales en la tarea común de expulsar a las fuerzas del centro y gobernar directamente el estado: Meixueiro, caudillo de la sierra Juárez apoyado por fuerzas zapotecas, Dávila, el señor de las mixtecas y Brena, representante de los valles centrales. Para 1919 esta triple alianza controla la mayor parte del estado, mientras que los constitucionalistas sólo dominan militarmente el istmo de Tehuantepec, la capital y parte de los valles centrales.

En Chiapas, los carrancistas hacen el milagro de reconciliar a dos grupos oligárquicos tradicionalmente enfrentados: los hacendados "liberales" de Tuxtla representados por Tiburcio Fernández y los finqueros ultramontanos de Los Altos encabezados por Alberto Pineda. La alianza de "mapaches" y "pinedistas" domina Chiapas desde 1914; en 1918 derrota a Salvador Alvarado que intentaba recuperar el estado para el constitucionalismo, y a fines de la década es indiscutiblemente la fuerza hegemónica regional.



Para estos grupos oligárquicos la revolución que viene del norte es una amenaza desestabilizadora, pero el vacío de poder que ha generado es también una coyuntura favorable para establecer, preservar o reforzar el control político directo sobre sus estados. Eventualmente, cacicazgos-regionales contrapuestos se disputan la hegemonía -- como en el caso de Chiapas durante la fase maderista de la revolución— pero pronto la amenaza de que fuerzas externas se enseñoreen en el estado unifica a los antagonistas. Así los caudillos chiapanecos, como los oaxaqueños, tienen que pactar alianzas, superando su regionalismo extremo y posponiendo las pugnas locales, en nombre de un regionalismo más amplio y para enfrentar un conflicto mayor.

En estas regiones del sur y sureste, la revolución es un fenómeno ajeno y distante, y las pugnas por la reforma, que conmueven el entramado social de otras regiones del país, sólo llegan como

un eco distorsionado. Ciertamente las estructuras agrarias del sur y sureste están marcadas por el mismo antagonismo entre pueblos y haciendas que caracteriza a otras regiones, pero la conmoción social, que llega de fuera, no logra dislocar esta contradicción de clase y la revolución resulta un agente externo que encarna en ejércitos de invasión portadores de caos. Comunidades indígenas, peones y finqueros —el viejo orden en pleno— se enfrentan unificados a las fuerzas de ocupación que vienen del norte. Ante el enemigo “extranjero” los ancestrales antagonismos se posponen y así como los grupos oligárquicos locales se reconcilian, también los agravios seculares que contraponen a oprimidos y opresores pasan a segundo plano. Naturalmente los líderes de esta guerra “nacional” provienen de la oligarquía; los mismos hombres que en tiempos de paz manejan cuadrillas de trabajadores en las labores agrícolas, toman el mando de los ejércitos de peones en tiempos de guerra.

Pero si los zapotecos siguen a un hacendado como Meixuerio, los mixtecos respaldan a un cacique expoliador como Dávila y los chamulas aceptan el liderazgo del finquero Pineda, no es solamente por la inercia de la sociedad tradicional, sino también porque las banderas de reforma social que esgrimen los invasores nortefios resultan impracticables si no es que incomprensibles.

El coahuilense Jesús Agustín Castro, jefe de la División 21 y principal adalid del constitucionalismo en las remotas regiones de Oaxaca y Chiapas, es, sin duda, un reformador convencido. La sociedad racista, patriarcal y afeudalada del sureste repugna a su conciencia nortefia, y a dondequiera que va se esfuerza por suprimir la ignominiosa servidumbre. En septiembre de 1914 Castro llega a Chiapas al frente de un ejército reclutado en el norte y en octubre proclama una “Ley de Li-

beración de Mozos", cuyo artículo primero anuncia la buena nueva de que, a partir de ese momento ". . . no hay sirvientes en el estado de Chiapas". Naturalmente los sirvientes siguen ahí, y un mes después, el finquero de los valles, Tiburcio Fernández se levanta en armas encabezando un ejército constituido precisamente por mozos. Siete meses más tarde, en junio de 1915, la División 21 abandona el estado derrotada por los mismos hombres a los que había intentado emancipar.

Castro marcha entonces a Oaxaca para combatir a la triple alianza que había proclamado la "soberanía" del estado desconociendo el pacto federal. Tras 8 meses de arduos combates la División 21 recupera la capital, y en septiembre de 1916 Castro puede anunciar en un manifiesto que "fiel a los principios que persigo, implantaré a la mayor brevedad posible las reformas de interés general decretadas por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. . . ", puede disponer que se revisen los contratos de servidumbre, puede instalar la oficina de la Comisión Local Agraria. . . pero no puede llevar nada a la práctica. Castro descubre, una vez más, que los decretos se firman de un plumazo pero las relaciones sociales no se suprimen de la misma manera. Su aislamiento llega al extremo de que en su gobierno nadie sabe cuáles son los distritos y municipalidades del estado y tiene que improvisarse una lista. Mientras tanto en la sierra Mixteca y parte de los valles centrales, los caciques "soberanistas", respaldados por miles de campesinos, siguen dominando la situación.

"Liberar a los mozos" era la consigna del constitucionalismo para el sureste. Aún después de 1915, en que Carranza asume, a regañadientes, los planteamientos agrarios del zapatismo para desarmar políticamente a la Convención que los había ratificado, los constitucionalistas no están realmente interesados en promover el reparto te-

rritorial. Su verdadero proyecto es una modernización de las relaciones laborales rurales que haga compatible la preservación de las haciendas con la dignificación del trabajo; su ideal es un hacendado moderno y emprendedor servido por jornaleros libres. En el sureste de la servidumbre y la esclavitud esta reforma se antoja subversiva, pero, en la práctica, resulta inoperante. Y es que las relaciones laborales coactivas no eran una ocurrencia anacrónica de los finqueros, sino la única forma efectiva de regular el abastecimiento de fuerza de trabajo en las condiciones regionales. Las plantaciones, monterías y fincas semiesclavistas del sureste podían ser desmanteladas al modo zapatista y dentro de un proyecto agrarista radical, pero no podían reproducirse si se suprimía el trabajo más o menos forzado. Una "Liberación de Mozos" que soslayara el régimen de propiedad y la estructura de las unidades de producción era poco menos que una utopía. Tal planteamiento podía alarmar a las oligarquías locales empujándolas a la rebelión, pero difícilmente movilizaba a los peones en favor de la reforma, en el mejor de los casos los mozos interpretaban su "liberación" como autorización para abandonar las fincas, pero pronto la falta de medios de vida los obligaba a renunciar a su efímera emancipación. Sin restitución territorial toda libertad era ilusoria, y el reformismo constitucionalista no tenía afanes expropiadores, su agrarismo era prestado y meramente coyuntural.

En estas condiciones la revolución carrancista no logra naturalizarse en el sureste, y en Chiapas genera una contrarrevolución con apoyo campesino, una guerra popular conservadora y dirigida por las oligarquías regionales. Moviéndose en un medio desconocido y a través de una naturaleza inhóspita, los ejércitos constitucionales se demoraron. El discurso y las consignas acuñados en el norte resultan un bagaje inútil, tan inútil

como el lastre de soldaderas y los grandes caballos de las llanuras que les restan movilidad. Y su derrota resulta de la conjunción de dos enemigos: la guerrilla conservadora y la naturaleza hostil. En el sureste a los carrancistas se los tragó la selva pero también los devoró un espeso entramado social cuyo equilibrio secular fueron incapaces de romper.

Naturalmente esto es una simplificación. En Oaxaca como en Chiapas, no todo eran oligarquías conservadoras enfrentadas a constitucionalistas norteños, operaban también algunos núcleos independientes que con frecuencia se identificaban con el zapatismo y propugnaban un agrarismo radical. En Oaxaca incursionaron defensores del Plan de Ayala como Andrew Almazán, Higinio Aguilar y el propio Eufemio Zapata, así como dos brigadas villistas encabezadas por José Isabel Robles, y no faltaron agraristas locales como Martínez Miranda, Tiburcio G. Cuéllar y los hermanos Romero. Pero estas fuerzas, que eran ajenas a las oligarquías regionales y que difícilmente pueden ser calificadas de conservadoras, se sumaron a la triple alianza de caciques y apoyaron la "soberanía". En Chiapas hubo rebeliones agraristas, como la del indio Petch, en Simojovel, e incluso regionalmente una fuerza de origen zapatista encabezada por Rafael Cal y Mayor y Pedro de la Garza. Pero aunque aquí la alianza de estas fuerzas con "mapaches" y "pinedistas" no cuajó, todos coincidieron en un común anticarrancismo. Al tratar de exportar sus decretos revolucionarios sin contar con base social y al imponer su hegemonía mediante la ocupación militar, el carrancismo unifica a todas las fuerzas regionales en su contra y propicia el apoyo masivo de la población a los caciques conservadores.

El oaxaqueño Gaspar Allende Arellanes —magonista desde 1906, preso en San Juan de Ulúa y

finalmente "soberanista"— resume llanamente las razones de esta forzada unificación: "Sí, estuve en las fuerzas defensoras del estado de Oaxaca cuando esta entidad reasumió su soberanía. . . (al igual) . . . que muchos convencidos y fieles agraristas, pues el constitucionalismo batió por igual tanto a los que defendían la soberanía del estado como a los sostenedores del Plan de Ayala. . . Forzosa, necesaria, inevitable, esta batida trajo como resultado inmediato la fusión accidental o transitoria y el entendimiento entre varios núcleos para la defensa común."

El pragmático Obregón, que había pactado con la izquierda zapatista de Morelos un reparto territorial en el que no creía, conviene con la derecha finquera del sur y sureste la preservación de un orden servil con el que tampoco simpatiza. En los dos casos la alianza se realiza con fuerzas de base campesina aunque políticamente contrapuestas. El peculiar reformismo constitucionalista ha generado una paradójica polarización de los trabajadores del campo que aparecen a su izquierda como fuerzas de la revolución conservadora.

Los "soberanistas" oaxaqueños y los "mapaches" y "pinedistas" de Chiapas son claros ejemplos de cómo los sectores más atrasados de las clases poseedores del viejo régimen se incorporan al flamante orden posrevolucionario legitimadas por un indudable respaldo rural. Pero el pragmatismo político y la habilidad negociadora de Obregón no sólo se prueban con caudillos tradicionales como éstos; el Plan de Agua Prieta también logra reconciliar con el centro a líderes de nuevo cuño, cacicazgos emergentes de base campesina que, forjados al calor de la revolución, son, sin embargo, defensores del orden establecido o terminan siéndolo. Tal es el caso de los hermanos Cedillo de San Luis Potosí y de Manuel Peláez de la huasteca veracruzana.

Por algunos años el cedillismo se mantiene indefinido entre la revolución campesina y el cacicazgo conservador, por el que sólo se inclinará claramente en la década de los años veinte. La ambigüedad de Cedillo, y también su fuerza, provienen del origen radical del movimiento que finalmente capitaliza.

A partir de 1913 los hermanos Alberto y Francisco Carrera Torres encabezan un levantamiento sustentado en campesinos y recolectores de ixtle de una región que se extendía desde Guadalcázar, en San Luis Potosí, hasta Tula, en Tamaulipas. Las fuerzas de los Carrera Torres estaban formadas por voluntarios sostenidos por las comunidades, y las armas se obtenían en los EEUU con recursos provenientes de la venta de ixtle. Planteamientos agrarios comunes los cohesionan políticamente y el 4 de marzo de 1913 proclaman una "Ley Ejecutiva de la Repartición de Tierras" en la que declaran nulas las deudas de los peones y establecen que "Todas las haciendas que caerán en manos de los jefes de la revolución y que pertenecen a sus enemigos serán inmediatamente repartidas. . ."

En una zona con fuerte presencia latifundista estos planteamientos rebelan el surgimiento de un movimiento campesino revolucionario que incide sobre la contradicción principal de la formación de clases regional. No se trata de una revolución "importada" que reclute y desarraigue tropas campesinas sin cuestionar el orden de cosas local, y de hecho las fuerzas de Carrera Torres difícilmente actúan fuera de su territorio; no es tampoco un movimiento autodefensivo de la oligarquía local tendiente a preservar sus intereses, por el contrario, debido a su beligerancia muchos terratenientes abandonan el estado; mucho menos puede ser calificado de simple bandolerismo. Se trata más bien de un proceso semejante al del zapatismo de Morelos, que en esos años se re-

produce en diversas regiones del país. Domingo Arenas en Tlaxcala, Miguel de la Trinidad Regalado en Michoacán, los magonistas Padua y Salas en el sur de Veracruz, los hermanos Gómez en Tabasco, etc., son los gérmenes dispersos de una revolución campesina que, pese a su localismo o quizá gracias a él, cuestiona profundamente la estructura básica de la sociedad rural porfirista.

Formalmente los Carrera Torres se incorporan al villismo, y como parte de esta fuerza nacional puede considerarse derrotado desde 1915, pero como núcleo regional sólidamente arraigado en las comunidades, el movimiento se mantiene al estilo zapatista. La "Brigada José María Morelos" con 2000 hombres a los que, desde la muerte de Alberto Carrera Torres en 1917, encabeza Saturnino Cedillo, se repliega a las montañas donde se mantiene irreductible durante casi cinco años.

En 1920 Cedillo se incorpora al Plan de Agua Prieta aportando fuerzas considerables, y al pacificarse adopta la misma fórmula que seguirá Villa: mantiene aglutinados a sus veteranos en 10 colonias agrícolas militares que le proporcionan sólida base organizada. Si en ese momento el movimiento parece preservar la herencia revolucionaria de Carrera Torres, sin embargo, de aquí en adelante, Cedillo se definirá cada vez más como un caudillo militar esencialmente conservador.

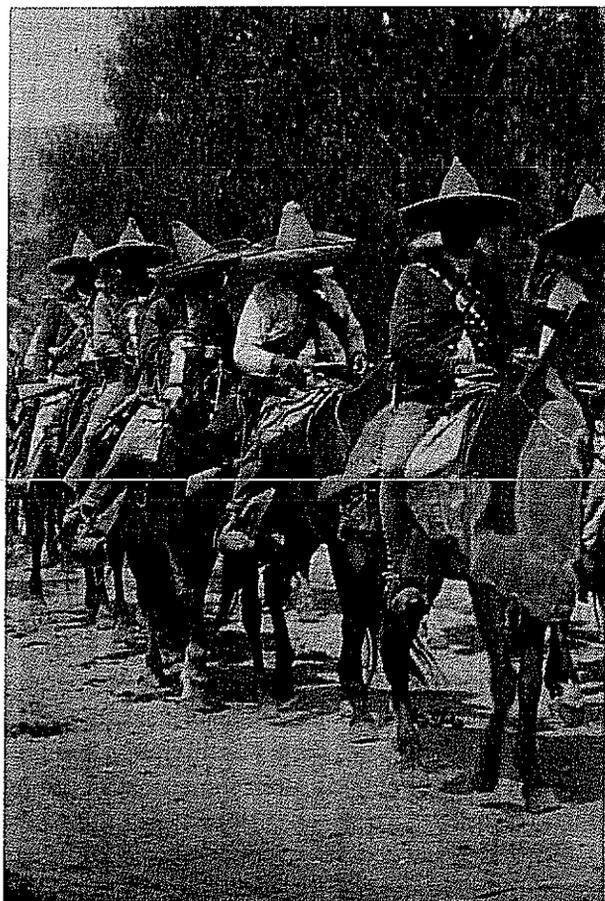
El germen de este viraje está en las condiciones mismas de la pacificación, pues las colonias de veteranos son una modalidad de agrarismo militar que en principio excluye el reparto a los no combatientes. Sin duda el fuerte arraigo de Cedillo y la propia organización de los veteranos podían haber sido la punta de lanza de un movimiento más amplio; pero después de 1920 Cedillo se orienta paulatinamente hacia la consolidación de un cacicazgo militar y su "agrarismo" se

reduce a un medio para mantener su base de apoyo.

Durante la década de los años veinte Cedillo no deja de fortalecerse: sus "agraristas" armados —de hecho un ejército privado— se transforman en un contingente militar imprescindible para los gobiernos del centro y, al mismo tiempo, el caudillo emergente consolida una alianza regional con la vieja oligarquía que en la fase radical del movimiento había sido golpeada pero no destruida. Finalmente Cedillo y sus incondicionales se convierten en nuevos terratenientes y desarrollan una política de represión al movimiento campesino independiente. Pero esto ya es harina de otro costal.

Otro caudillo con el que Obregón pacta en 1920 es Manuel Peláez Gorrochotegui, hombre fuerte de las Huastecas. Como Cedillo, Peláez es un cacique de nuevo cuño formado al calor de los combates, pero su origen no está en un movimiento campesino revolucionario y en su "Manifiesto de Tierra Amarilla", publicado en 1917, brilla por su ausencia el agrarismo. Pero la falta de planteamientos reformistas no le impide controlar una amplísima región que en 1920 abarca partes de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Se ha sostenido reiteradamente que Peláez fue un agente de las compañías petroleras de la Huasteca, y todo parece indicar que efectivamente estaba al servicio de las transnacionales, pero esto no explica su extensa base social. Estas empresas, al igual que los hacendados de otras regiones, estaban interesadas en preservar su territorio de la conmoción revolucionaria, pero, a diferencia de las oligarquías tradicionales, no disponían de una estructura caciquil sólidamente arraigada y difícilmente podían movilizar, por sí mismas, ejércitos de peones semejantes a los que pusieron en pie de guerra los finqueros del sur y sureste



del país. Carentes de la legitimidad patriarcal de los cacicazgos agrarios de viejo cuño, las transnacionales necesitaban un paladín con arraigo popular y lo encontraron en la persona del rancheiro y contratista Manuel Peláez.

Peléez pudo servir a sus patrones transnacionales, soslayar toda transformación agraria y a la vez ser un caudillo más o menos popular, entre otras cosas porque la relación entre las petroleras y su ámbito rural era de naturaleza distinta al antagonismo pueblos-haciendas típico de otras regiones del país. El afianzamiento territorial de las compañías, que pagaban precios irrisorios por

terrenos probadamente petrolíferos y recurrían a "guardias blancas" para ablandar a los propietarios reticentes a vender, era sin duda conflictivo; pero también es cierto que los campesinos de la región, predominantemente rancheros, no despreciaban la posibilidad de transformar chapopoterías poco fértiles en buen dinero. La confrontación se daba en torno al precio y cobraba el carácter de un regateo, sin duda disparateo y violento, pero regateo al fin. Expropiar a las compañías para recuperar las tierras y restituirles su uso agrícola no parecía una demanda razonable, de modo que el agrarismo tradicional tenía poco sentido. Por otra parte las compañías ofrecían empleo. Si bien los salarios eran cuatro veces menores que en los EEUU y los peones se manejaban al estilo hacendado, lo cierto es que el petróleo había generado una demanda laboral antes ausente y los salarios eran altos en comparación con los que se pagaban en el resto del país.

El precio de la tierra y las condiciones de trabajo eran motivo de confrontaciones ásperas y en ocasiones sangrientas, pero en definitiva negociables, y la habilidad de Peláez consistía precisamente en ser un excelente mediador. Peláez, como contratista de El Águila, había manejado, desde 1910, a miles de trabajadores y después de 1914 utiliza su experiencia como capataz paternalista, ya no para construir presas y caminos, sino en la organización de un ejército. Primero como contratista y después como general mercenario, Peláez sirve eficientemente a sus patrones, pero también negocia los intereses de sus subordinados, y si primero consigue modestos aumentos salariales, después garantiza a las tropas el oportuno pago de los haberes. Por si esto fuera poco, Peláez también media en las transacciones territoriales: por un lado convence a los propietarios rejejos de que vendan sus tierras, y por otro negocia un mejor precio por parte de las compañías.

Al final unos y otros quedan satisfechos y Peláez se hace paulatinamente más indispensable y poderoso. Pero el general no se conforma con esto, también pretende hacerse más rico, y a cambio de sus servicios exige una jugosa comisión.

El dominio militar de Peláez en la zona petrolera, desde 1914 hasta 1920, garantiza la seguridad de las compañías, al tiempo que mejora la capacidad de negociación de la población local, en la medida en que el general aparece como mediador en todos los conflictos y a cambio de su labor pacificadora obtiene algunas concesiones. Pero Peláez también refuerza su prestigio entre los pequeños propietarios al mantener fuera de la región a guerrillas de diferente filiación política que no sólo exigen préstamos forzosos a las compañías sino que también saquean a los rancheros.

Peléez es algo más que el brazo armado de las compañías petroleras; tiene una amplia base social y acaudilla fuerzas más o menos populares, no porque pretenda transformar las estructuras sociales de la región, sino precisamente porque las preserva, al mismo tiempo que aprovecha la situación de guerra para inclinar levemente la balanza a favor del sector mayoritario constituido por peones y rancheros.

En 1920 Peláez se pacifica. Entra en la capital de la República marchando junto a Obregón e inmediatamente es nombrado jefe de operaciones de la Huasteca y reconocido como general de división. Como Cedillo en San Luis Potosí, Peláez intenta consolidar su poder político-militar incorporándose económicamente al orden establecido, pero en su territorio el verdadero negocio no es volverse hacendado sino convertirse en petrolero. Peláez lo intenta seriamente y logra mantener un pozo en explotación, pero finalmente fracasa pues las compañías extranjeras se niegan a com-



prarle su producción. Las transnacionales lo habían usado como perro guardián, pero no están dispuestas a admitirlo en el negocio como empresario.

Lo anterior es apenas una somera muestra de la abigarrada red de alianzas que concurren en la coyuntura de 1920, y con las que debe iniciarse la "etapa constructiva" de la revolución.

El grupo Sonora reconcilia a los zapatistas con su verdugo Pablo González, pacta con los más conspicuos representantes de la vieja oligarquía y también con atrabiliarios caciques emergentes; y convergen en el obregonismo líderes socialistas radicales como Carrillo Puerto y prófugos del reyismo como Peláez, indios rebeldes como el jefe yaqui Ignacio Mori y desalojadores de los chumulas como el finquero Tiburcio Fernández. El reto del nuevo régimen radica, entonces, en transformar esta precaria alianza coyuntural en un orden y para esto es necesario irse desembarazando paulatinamente de tan incómoda y variopinta compañía. Volver al orden al campesinado radical, moverle el piso a los prepotentes oligarcas regionales, restarles base a los caciques emergentes, debilitar, en fin, a los aliados ocasionales en vista a su liquidación definitiva, es la tarea del día. Y pronto se verá que el instrumento privilegiado para lograr este cometido es la reforma agraria institucional, el organismo hecho gobierno.

Los artífices del nuevo estado tendrán que ser agraristas, no por convicción, ni siquiera porque han llegado a un acuerdo con el zapatismo, sino sobre todo porque han pactado con numerosos cacicazgos regionales y oligarquías conservadoras que se apoyan en bases rurales. Si durante la etapa armada de la revolución todas las facciones echaron mano del campesinado para impulsar sus programas, desatando con ello al amenazante monstruo rural, en la "etapa constructiva" los

forjadores del nuevo estado también tendrán que apelar al campesinado para restaurar la unidad y legitimar su proyecto. El agrarismo institucional aparece entonces como un arma de doble filo: será el instrumento para recuperar al campesinado revolucionario, pero también resultará útil para restarle base social a los caudillos conservadores.

Obregón, quien estaba convencido de que la solución al problema agrario radicaba en la educación, la tecnología y el mercado externo, y rechazaba tajantemente el reparto territorial, tendrá que recurrir una y otra vez al agrarismo. El exitoso agricultor sonoreño, que durante su campaña habrá descalificado los proyectos de reglamento agrario presentados por Soto y Gama por su "falta absoluta de sentido práctico. . . Y de conocimientos agrícolas", tendrá que recurrir al abogado exzapatista para forjar su brazo político rural: el Partido Nacional Agrarista. El manco de Celaya, que en una carta de 1919 lamentaba amargamente que el problema agrario hubiera sido "explotado como arma política por la mayor parte de los revolucionarios", se transformará como presidente electo, en un auténtico virtuoso del agrarismo político. Ventajas del pragmatismo.

La convocatoria a la constitución del P.N.A. en 1920 se inicia con una significativa frase:

Eliminado Carranza que era el obstáculo para la unión. . . La unificación de los revolucionarios se lleva a cabo bajo los principios agrarios. . .

La verdad está precisamente en la proporción inversa: la unificación de los revolucionarios se logró en 1919 gracias a Carranza. . . y contra él, y en los años venideros los "principios agrarios" serán el principal terreno de disputa y confrontación.

